

Rito y realidad: elecciones en Costa Rica

MANUEL ROJAS BOLAÑOS *

EL 4 DE FEBRERO de 1990 se realizaron elecciones en Costa Rica para elegir presidente, dos vicepresidentes, cincuenta y siete diputados y 1 050 regidores municipales en los 81 cantones del país. Por novena vez desde la Guerra Civil de 1948, los costarricenses concurren a las urnas electorales para reafirmar la legitimidad de un mecanismo que se ha venido perfeccionando a lo largo de cuatro décadas, hasta convertirse en el paradigma centroamericano.

Pasado el fragor de la Guerra Civil de 1948, el mecanismo electoral se estabilizó y adquirió una creciente legitimidad, sobre todo a partir de 1962, cuando el grupo derrotado por la vía armada a fines de los años cuarenta, se integró plenamente al sistema electoral. Desde entonces las elecciones en Costa Rica son un ritual que se viene celebrando cada cuatro años; un ritual que permite seleccionar gobernantes y a la vez reafirmar el concepto de nacionalidad predominante en el medio costarricense: el de un pueblo esencialmente libertario, sin mayores desigualdades sociales, y por tanto sin mayores conflictos —salvo los “inventados” por extremistas—, que prefiere resolver los problemas mediante el diálogo, sin apelar a la violencia, como es característico en los otros países de la región. Por supuesto que algunas de esas “características” son reales; pero no son una especie de “sustancia espiritual”, como lo cree el costarricense medio, sino el resultado de un conjunto de condiciones sociales que las hicieron posible; condiciones que podrían estar cambiando en la actualidad.

Una de las reglas fundamentales del ritual, la posibilidad de libre postulación a los cargos electivos para todos los ciudadanos, lo que va aparejado a la libre elección dentro de una amplia gama de fórmulas establecidas también libremente, comienza a cumplirse con dificultad, dada la aparente consolidación del bipartidismo. En efecto, dos grandes partidos, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), se repartieron el 96.2% del total de votos emitidos en la elección de presidente y vicepresidentes, y el 85.1% de los votos en la elección de diputados.

En 1990 concurren a las urnas electorales 1 384 326 votantes, de un

* Sociólogo costarricense, director del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS) de San José, Costa Rica.

padrón electoral compuesto por 1 692 050 electores, lo que arroja un abstencionismo de 18.2% como promedio nacional. El análisis por provincias muestra un abstencionismo mucho menor al promedio nacional: en Alajuela (15.1%), Heredia (14.8%) y Guanacaste (16.5%); en San José el abstencionismo es similar al promedio nacional (18.5%), mientras que en Puntarenas y Limón es considerablemente más alto: 23.5% y 28% respectivamente.

Los resultados fueron favorables al Partido Unidad Social Cristiana, que obtuvo un 50.2% del total de los votos emitidos para presidente y vicepresidentes; mientras que Liberación Nacional, el partido que estaba en el gobierno, recibió el 46% de la votación total. La diferencia en votos entre estos dos grandes partidos fue relativamente pequeña: 57 888 votos, o sea, el 4.2% de la votación.

En lo que se refiere a la integración de la Asamblea Legislativa, el PUSC obtuvo 29 de los 57 puestos elegibles, mientras que el PLN ganó 25; los tres puestos restantes fueron para partidos pequeños: 1 para la Coalición Pueblo Unido, 1 para el Partido Unión Generaleña y 1 para el Partido Unión Agrícola Cartaginés. En la mayor parte de las municipalidades el PUSC también obtuvo la mayoría.

A. LOS PARTIDOS CONTENDIENTES

Un total de diecisiete partidos participó en las elecciones, pero solamente seis de ellos postularon candidatos en los tres niveles de elección. En las elecciones para diputados participaron catorce partidos, y quince en la de municipios.

Como ha sido señalado, de ese conjunto de partidos, dos son los que movilizan la mayor parte del electorado: el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Un pequeño porcentaje de los votos es manejado por el resto de los partidos, incluyendo a los de izquierda: Partido del Progreso, Pueblo Unido (Coalición entre Vanguardia Popular y el Partido del Pueblo Civilista), y Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha (PRTL). Constituye una novedad la participación de un número importante de partidos regionales, aunque con limitado éxito electoral.

1. *El Partido Liberación Nacional*

Después del Partido Vanguardia Popular, el tradicional partido de los comunistas costarricenses, Liberación Nacional, es el de más larga trayectoria institucional dentro del esquema político nacional. Aunque como fecha de fundación se toma el 12 de octubre de 1951, en realidad el partido fue creado para apoyar la candidatura de José Figueres en las elec-

CUADRO I

COSTA RICA: PARTIDOS CONTENDIENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ELECCIÓN. 1990

<i>Partidos</i>	<i>Niveles de elección</i>		
	<i>presidente</i>	<i>diputados</i>	<i>municipes</i>
Del Progreso	X	X	X
Independiente	X	X	X
Alianza Nacional Cristiana	X	X	X
Unión Generala​ña		X	X
Nacional Independiente		X	X
Unidad Social Cristiana	X	X	X
Alajuelense Solidario		X	X
Humanista			X
Alajuelita Nueva			X
Unión Nacional			X
Acción Laborista Agrícola		X	X
Unión Agrícola Cartaginés		X	
Agrario Nacional		X	X
Auténtico Limonense		X	X
Pueblo Unido	X	X	X
Revolucionario de los Trabajadores en Lucha	X	X	
Liberación Nacional	X	X	X

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones.

ciones presidenciales de 1953. Figueres había sido el líder del conjunto de fuerzas que resultaron victoriosas en la guerra civil de 1948, y había presidido una junta de gobierno de dieciocho meses de duración.

Desde 1953 este partido ha resultado triunfador en seis elecciones, constituyéndose en el partido dominante del sistema político costarricense, con

una clientela estable de aproximadamente 40% del electorado. Hasta finales de los años setenta, el PLN fue un defensor del intervencionismo estatal en la economía, y de la creación de instituciones de bienestar social que tuvieron un fuerte impacto en las condiciones de vida de la mayoría de la población del país.

Con el advenimiento de la crisis, el PLN rompió parcialmente con su pasado, convirtiéndose en el principal propulsor del ajuste estructural que hoy en día está en marcha en Costa Rica. Ruptura parcial, porque aunque formalmente se define como socialdemócrata, el PLN no se ha distinguido precisamente por ser un partido rígidamente apegado a una ideología política. En efecto, el pragmatismo ha sido la característica esencial de esta agrupación, lo que le permitió convertirse en el partido electoral de masas costarricense, con una amplia base compuesta por pequeños y medianos productores agrícolas, empresarios industriales y agrícolas, sectores medios profesionales, empleados públicos y otros asalariados de medianos y bajos ingresos.

Para las elecciones de 1990, el PLN presentó como candidato a Carlos Manuel Castillo, un economista de 61 años, con una amplia trayectoria en el plano político (ha sido vicepresidente, ministro, diputado y presidente del Banco Central), además de haber desempeñado importantes cargos en organismos regionales como SIECA y CEPAL.

Formalmente, el PLN no presentó en estas elecciones un programa de gobierno estructurado, aunque un libro del candidato, que circuló unos meses antes de las elecciones —*Construyamos el futuro; ideario de mi gobierno*—, plantea veintiséis tesis sobre diversos aspectos de la realidad del país que pueden ser tomadas, junto con un conjunto de medidas concretas que fueron anunciadas hacia el final de la campaña,¹ como el programa que el PLN pretendía realizar si lograba alcanzar un nuevo triunfo en las elecciones de febrero. La carencia de un programa formal de gobierno no parece haber sido un factor de influencia en los resultados de las elecciones, puesto que después de dos administraciones consecutivas, el PLN no podía ofrecer otra cosa que el continuismo en materia de política económica y social; política que además parecía ser positivamente evaluada por la mayoría de los costarricenses, de acuerdo con los resultados de los sondeos de opinión realizados a lo largo de los últimos cuatro años. El PLN procedió entonces de acuerdo con su tradición de pragmatismo, puesto que en las actuales condiciones del país, cualquier intento de formulación de un programa de gobierno no puede hacerse fuera de los límites establecidos por el proceso de reestructuración que sufre la sociedad costarricense; proceso fuertemente condicionado por los convenios con el FMI, el Banco Mundial y la AID, pero también apoyado, con matices, por las cúpulas de

¹ Como la creación de centros de atención integral para niños, un aguinaldo adicional en febrero para compras de útiles y uniformes escolares, y transporte gratuito para ancianos y estudiantes.

los dos grandes partidos políticos del país. En cierto sentido, entonces, la formulación de un programa de gobierno es un ejercicio inútil, puesto que las líneas fundamentales del desarrollo de la acción gubernamental no sólo están predefinidas, sino que hay acuerdo sobre ellas. Sin embargo, puesto que en igualdad de circunstancias los partidos no proceden en el gobierno de la misma manera, el programa sigue siendo un importante documento de análisis, porque deja entrever el conjunto de principios que rigen la acción política de los dirigentes. Estos principios, unidos a la experiencia histórica y a la presión de las bases, son factores que influyen en la forma diferente en que procede cada partido en la coyuntura desde el gobierno.

Como se señaló arriba, el PLN no presentó a consideración del electorado un programa estructurado; sin embargo, es posible, leyendo entre líneas, extraer del libro de Castillo algunos de los principios de lo que podría ser la plataforma pragmática de una administración encabezada por él. Se parte de una evaluación de la coyuntura, caracterizada según Castillo por la transición, pues con la crisis de finales de los años setenta llegó a su fin un período de crecimiento económico sostenido, donde fue posible aplicar con éxito un tipo de acción estatal conocida en el país como “modelo liberacionista”. Se inició entonces una nueva etapa, difícil para el país, sobre todo por el “manejo interno inicialmente desacertado” de la crisis, que puso “en entredicho, por algún tiempo, la viabilidad económica y social de Costa Rica”. Para Castillo esa situación ha cambiado, y los peligros de la crisis se han convertido en oportunidades de progreso.

En el planteamiento castillista se transparenta lo que ha sido constante en todos los gobiernos liberacionistas: una definición mínima de principios y un pragmatismo en el manejo de la cosa pública. Como él lo señala (1989: 13), para “el Partido Liberación Nacional la ideología, que constituye su razón de ser en la política costarricense, es invariable”, y sus “principios esenciales son la devoción a la libertad, el compromiso con la honestidad en el servicio público y la determinación de utilizar la acción del Estado y la iniciativa privada para fomentar el crecimiento de la economía orientada a mejorar continuamente las condiciones de vida de todos y especialmente de los más necesitados”.

Por esa razón el Estado debe jugar un papel “de gestor, rector y orientador del desarrollo económico y social de la nación, y procurar el mayor bienestar de sus habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza” (*ibidem*: 57). Por supuesto que debe ser eficiente, pero eso se puede lograr, según Castillo, simplificando y flexibilizando la estructura institucional, reduciendo ministerios y reforzando los mecanismos de coordinación. Por otra parte, aun cuando se acepta la necesidad de reducir el tamaño del Estado, se postula la necesidad de mantener los programas de desarrollo social, entre otros los de salud, educación, vivienda, nutrición infantil y saneamiento ambiental.

En lo que se refiere a la economía, Castillo propone “una economía al

servicio del hombre”, a partir de la afirmación que los “principios fundamentales del modelo liberacionista de desarrollo económico no se han agotado” (*ibidem*: 101). Esos principios son: “el desarrollo debe estar orientado al bienestar de todos bajo la inspiración de la justicia; y, el desarrollo debe lograrse dentro del esquema de una economía mixta, de mercado libre con intervención del Estado, para asegurar el bien común, con el apoyo creciente de nuevas formas de producción asociativa” (*idem*). Para alcanzar tal estadio de desarrollo, se postula el incremento de la productividad nacional, lo cual a su vez implica una mayor inserción dentro del mercado mundial, aunque no se desecha la participación dentro de un mercado común regional.

La democracia política, para Castillo, debe sustentarse en la democracia económica; es decir, en la posibilidad de acceso a la propiedad por parte de todos los ciudadanos a través de formas diversas, puesto que “si el sufragio es el corazón de la democracia política, la propiedad debe ser el corazón de la democracia económica. Por eso, debe defenderse la institución tradicional de la pequeña propiedad, dándole mayor eficiencia empresarial y generalizar las formas asociativas de producción...” (*ibidem*: 40).

Se aboga por una mayor participación de los trabajadores en la dirección y propiedad de las empresas; pero el planteamiento es más ambiguo que el de los socialcristianos en este mismo aspecto. Como lo confiesa el autor, “este terreno es campo desconocido, pero no hay duda de que, conceptual y operativamente, encierra importantes posibilidades de progreso hacia el objetivo medular de crear en Costa Rica un país de propietarios”.

Castillo se manifiesta de acuerdo con el proceso de ajuste estructural de la sociedad costarricense, proceso que define de la siguiente manera (*ibidem*: 106-107): “Se trata de producir cosas nuevas y de producir mejor aquellas que ya se producen, así como de aprender a conocer, a penetrar y a vender en nuevos mercados”. El ajuste, sin embargo, debe realizarse “en forma gradual, simultánea y selectiva”; y con un amplio apoyo del Estado, lo que implica redefinir el intervencionismo pero no decretar su desaparición.

Finalmente, en materia de política exterior, Castillo muestra su acuerdo con las líneas seguidas por el gobierno de Arias en cuanto a la pacificación regional; pero con una cercanía mayor hacia el gobierno estadounidense, que se puso de manifiesto en sus intentos de acercamiento a la administración Bush durante la campaña, en su apoyo abierto a la invasión a Panamá, y en su rechazo total del sandinismo.

2. *El Partido Unidad Social Cristiana*

Como partido, la Unidad Social Cristiana tiene escasamente ocho años de haberse constituido; aunque el conjunto de sectores que lo conforman, desde principios de los años cincuenta se ha opuesto al PLN, actuando unas

veces en coalición y otras separadamente. Después de las elecciones de 1982, el partido se consolidó como tal, y adoptó un ideario que es una mezcla de socialcristianismo con neoliberalismo, lo que es un reflejo de las tendencias que se mueven en su interior. En efecto, los sectores más viejos del capital se han agrupado tradicionalmente en oposición al PLN, en mezcla curiosa con los restos del reformismo social-cristiano de los años cuarenta; más recientemente se han agregado los grupos más ortodoxos del neoliberalismo.

Para las elecciones de 1990, el PUSC postuló nuevamente a Rafael Ángel Calderón Fournier como candidato; un abogado de 40 años, quien había sido candidato en las elecciones de 1982 y 1986. Calderón Fournier es el prototipo del político que inicia su carrera desde muy joven, con la mira colocada en alcanzar algún día la presidencia de la república. Fue diputado y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores en la administración Carazo (1978-1982). Su carrera política está marcada por el hecho de ser hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia, quien fue presidente de 1940 a 1944, y a quien se reconoce como el autor de las reformas sociales en Costa Rica.² Calderón Guardia intentó ser nuevamente presidente en 1948, en un proceso electoral que culminó precisamente en la guerra civil. Tuvo que abandonar el país y exiliarse en Nicaragua y en México; a finales de 1948 y en 1955 intentó recuperar el poder por la vía de las armas, con la ayuda de Anastasio Somoza García; regresó al país a finales de los años cincuenta; y para las elecciones de 1962 se presentó nuevamente como candidato, pero fue derrotado el candidato de Liberación Nacional.

El PUSC presentó a consideración de los electores un voluminoso programa de gobierno —*El futuro es de todos! Programa de Gobierno 1990-1994*—, que comienza con el señalamiento de los valores fundamentales que guían la acción política de la Unidad Social Cristiana. Se trata de unas cuantas páginas en donde se siente una tensión constante entre el individualismo inherente a cualquier planteamiento liberal, y el necesario reconocimiento de las obligaciones colectivas que se derivan de la vida en sociedad. Para los autores del programa, el valor fundamental del proyecto político socialcristiano es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la que es depositaria de una serie de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, inalienables e irrenunciables, anteriores al Estado y que están por encima de él.

Según el PUSC, la libertad es esencial para la realización del ser humano, y sólo encuentra barreras en el reconocimiento de la libertad de que gozan los demás miembros de la sociedad; para su ejercicio requiere de condicio-

² En la administración Calderón Guardia se promulgó el Código de Trabajo y se incluyó en la constitución el capítulo de garantías sociales; en esos cuatro años se abrió la Universidad de Costa Rica, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones, que luego conformaron el sector de bienestar social del Estado costarricense, sin duda el más extendido de América Central.

nes materiales que solamente pueden tenerse si “las oportunidades y los bienes están repartidos lo más justamente posible; sin justicia social la libertad, desde nuestro punto de vista, no es posible” (*El futuro...*, 1989:17).

En la parte que se refiere al trabajo y a la propiedad, la tensión vuelve a aparecer, porque si bien es cierto que se reconoce la legitimidad de la propiedad y de la empresa capitalista, se enuncia un ideal de empresa caracterizada por la colaboración del trabajo en la gestión empresarial, la participación de los trabajadores en los frutos de la empresa y el acceso de los trabajadores a la propiedad mediante la autogestión, la cogestión, el cooperativismo y otras.

Una situación similar se presenta en relación con el Estado, al cual se le asigna un carácter instrumental en la búsqueda del bien común, puesto que la acción estatal solamente se justifica en la medida en que implique a) “promover, apoyar, asistir y complementar la acción de los particulares, especialmente de los organismos intermedios, cuando ésta, orientada al bien común, no sea suficiente para alcanzar los fines socialistas propuestos”, y b) “asumir por sí, a título de competencia propia y durante el tiempo necesario, todas aquellas funciones que la complejidad creciente del orden social, interno y externo, hace imposible, inconveniente o difícil, que sean realizados por grupos privados, sin que se dañen o afecten los postulados del bien común” (*ibidem*: 24). En ese sentido, la acción del Estado debe verse como subsidiaria y complementaria de la actividad privada, que es la que tiene la primacía.

Dentro del capítulo de principios generales se incluye un apartado relativo a la participación y promoción popular, y otro dedicado a la democracia pluralista. En conjunto constituyen un llamado a ampliar la participación organizada de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus intereses particulares y los de la sociedad. Para los autores del programa, una democracia pluralista solamente es posible en la medida en que la voluntad ciudadana se exprese a través de “organizaciones intermedias”, que no deben ser absorbidas, manipuladas o condicionadas por el Estado.

En lo que se refiere a la economía, después de un elaborado diagnóstico de la situación nacional, se mencionan algunos principios básicos de la política económica a seguir en el gobierno, entre otros la vinculación del desarrollo económico con el desarrollo social; el apoyo a la empresa privada para que continúe contribuyendo al desarrollo económico del país; la promoción de la eficiencia económica sin que ello signifique el sacrificio innecesario de los sectores productivos del país; la democratización de la economía, y el reconocimiento del papel del Estado como regulador del desarrollo, pero con una amplia participación de los distintos sectores sociales.

Se admite la necesidad del ajuste estructural, pero aplicado “en forma

gradual (dando un tiempo razonable al empresario nacional para que ajuste su escala productiva) y selectiva (otorgamiento de incentivos según el valor agregado, el uso de insumos nacionales, la descentralización de la producción, la generación de empleo, la consideración de la variable medio ambiente) y mediante la utilización de mecanismos de fácil administración a través de reglas generales no discriminatorias" (*ibidem*: 103).

Finalmente, en el plano de la política exterior se insiste en la necesidad de que Costa Rica siga jugando un papel destacado en el proceso regional de negociaciones, pero se coloca especial énfasis en la necesidad de promover el funcionamiento eficaz del sistema interamericano (OEA), y en actuar dentro del marco de Naciones Unidas. El candidato del PUSC fue claro en afirmar que la política exterior no conformaba la prioridad número uno de sus preocupaciones, y que estaría más interesado que su antecesor en los asuntos internos del país. En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, es conocida la cercanía de los dirigentes del PUSC con los republicanos estadounidenses, sobre todo con su ala más conservadora.

3. *Los pequeños partidos*

Los resultados de las elecciones del 4 de febrero parecen reforzar el bipartidismo en Costa Rica, porque las pequeñas agrupaciones no tuvieron mucho éxito en la captación de votos, sobre todo en lo que se refiere a la elección presidencial (ver el cuadro 2). En la votación para diputados los resultados fueron menos desfavorables, aunque sólo tres de los candidatos de estos partidos lograron ser elegidos.

El sistema de elección de una sola vuelta, junto a otros factores (las dificultades para la inscripción de nuevos partidos, la forma de distribución de la deuda política, los elevados costos de los espacios en los medios de comunicación, etcétera), objetivamente favorecen el bipartidismo; sin embargo, no todas las dificultades que sufren las pequeñas agrupaciones pueden ser atribuidas a estos factores. En algunos casos hay carencias en cuanto a organización, en otros en lo que se refiere a la plataforma electoral y al perfil del partido y, en general, a las pequeñas agrupaciones les falta imaginación para enfrentar a los grandes partidos en espacios que no son los que se definen oficialmente como políticos, pero donde posiblemente se forman las actitudes políticas de la mayoría del electorado.

Sin embargo, en las pasadas elecciones los partidos de carácter regional mostraron ciertas posibilidades de desarrollo como alternativa al bipartidismo, cuando menos en ese nivel. Los casos más significativos parecen ser los del Partido Unión Generaleña (PUGEN) y el Partido Agrario Nacional (PAN), agrupaciones que alcanzaron importantes resultados en la pasada contienda electoral. Dichos grupos figuran principalmente como opciones regionales (Pérez Zeledón y Limón), para obtener algún grado de influencia en las altas esferas del poder político; sin embargo, en el

caso del PUGEN se operó un salto hacia el nivel nacional con éxito, porque presentó candidatos en todas las provincias y obtuvo 32 292 votos (2.3% del total de votos emitidos para diputados); una cantidad apreciable si se toma en cuenta que su trayectoria es mínima —es decir, que no tiene una base social consolidada a lo largo de varias campañas— y que su presencia en los medios electrónicos fue insignificante.

En lo que se refiere al PAN, su surgimiento ocurrió en 1988, debido al interés de un grupo de personas por buscar soluciones al problema de la tierra, de la asistencia técnica, de la comercialización, del crédito y los productos agrícolas, que enfrentaban los campesinos de la región atlántica, una región agitada por los problemas agrarios a lo largo de más de dos décadas. Aunque los votos obtenidos no le permiten elegir un diputado (aproximadamente el 6% de la votación total para diputados en la provincia de Limón), le aseguran el financiamiento estatal para las próximas elecciones, lo que implica la posibilidad de realizar una campaña en mejores condiciones financieras.

Los resultados obtenidos por el PAN y por el PUGEN parecen indicar que un número significativo de votantes considera que la labor en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades no puede seguir siendo monopolizada por los partidos mayoritarios, carentes de enfoques regionales para la solución de problemas concretos. En ese sentido, los pequeños partidos regionales podrían estar señalando un camino posible para el enfrentamiento al bipartidismo presente en el esquema político costarricense.

Frente a estas experiencias relativamente exitosas, en las elecciones del 4 de febrero los partidos que conforman la izquierda tradicional del país (comunistas, trotskistas y socialistas), volvieron a mostrar su incapacidad para movilizar a sectores importantes del electorado, al obtener apenas el 1% de los votos para presidente y el 3.8% de los votos para diputados.

Por segunda vez desde 1982 la votación del Pueblo Unido bajó, y apenas logró elegir un diputado por San José;³ la votación obtenida por el Partido del Progreso y el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha, fue insignificante. Al rechazo que el costarricense medio siente por todo lo que huele a comunismo o socialismo, lo que sin duda constituye un rasgo de intolerancia presente en la cultura política costarricense —no vamos a entrar aquí a explicar las razones históricas de tal rasgo—, se sumaron los acontecimientos de Europa del Este, que fueron mostrados por la prensa nacional como el fracaso mundial del socialismo; algo similar ocurrió con la difícil situación sociopolítica de los sandinistas en Nicaragua. A ello habría que agregar la carencia de una plataforma política amplia y elaborada, atractiva para sectores sociales muy diversos. Sin planteamiento y sin recursos, la izquierda costarricense se sometió nuevamente al juicio del electorado en condiciones de extrema inferioridad, movilizando apenas

³ En las elecciones de 1982, Pueblo Unido logró elegir cuatro diputados, es decir, el 7% del total.

sus votos de base y ciertos votos ideológicos,⁴ sobre todo en lo que se refiere a la elección de diputados, donde Pueblo Unido obtuvo 44 161 votos (3.2% del total de votos).

Los resultados electorales del conjunto de la izquierda plantean algunas interrogantes: ¿se ha cerrado el ciclo histórico que se inició con la fundación del Partido Comunista en 1931? Y si ello es así, ¿hay condiciones para el surgimiento de nuevas opciones políticas para todos aquellos que siguen pensando que aún están inconclusas las tareas de construcción de un orden social más democrático y más justo?

B. LA DISTRIBUCIÓN DEL VOTO

El PUSC ganó todas las provincias, pero las diferencias más notables con respecto a Liberación Nacional las obtuvo en Guanacaste, Puntarenas y Limón. En San José, la diferencia fue mínima, y en las restantes provincias las diferencias con el PLN no fueron muy altas, como puede verse en el cuadro 2. En las elecciones anteriores, Liberación Nacional solamente había perdido las provincias de Puntarenas y Limón, pero por márgenes relativamente estrechos; nunca en su historia había perdido en Cartago.

CUADRO 2

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES POR PROVINCIA Y POR PARTIDO, 1990

Provincia	del Progreso	Independiente	Alianza Nacional Cristiana	Unidad Social Cristiana	Pueblo Unido	Revol. de los Trab. en Lucha	Liberación Nacional	Votos emitidos
San José	1 193	260	1 497	262 760	3 986	305	261 997	542 718
Alajuela	367	115	798	126 260	118	145	117 003	251 794
Cartago	289	100	314	77 948	819	125	75 170	158 967
Heredia	296	54	428	59 747	858	64	56 250	120 252
Guanacaste	95	46	239	53 017	446	69	46 653	103 500
Puntarenas	182	87	478	67 179	1 092	132	50 571	124 642
Limón	125	84	455	47 678	828	165	29 057	82 453
Total	2 547	746	4 209	694 589	9 217	1 005	636 701	1 384 326

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones.

⁴ Para una definición de voto ideológico, voto centrado en el problema, voto castigo y voto en contra, ver Sartori, Giovanni, *Teoría de la democracia*, Alianza Editorial Mexicana, México, 1989, t. 1, p. 147.

De los 81 cantones del país, el PUSC ganó 60: 9 en San José, 12 en Alajuela, 5 en Cartago, 8 en Heredia, 9 en Guanacaste, 11 en Puntarenas y 6 en Limón (ver el cuadro 3). En 1986 el PLN había ganado 55 cantones: 19 en San José, 13 de Alajuela, en los 8 cantones de Cartago, en los 10 cantones de Heredia, 3 de Guanacaste y 2 de Puntarenas.

CUADRO 3

RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Y PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL POR PROVINCIA Y POR CANTÓN, 1990
(porcentajes del voto total)

<i>Provincia y cantón</i>	PUSC	PLN	<i>Provincia y cantón</i>	PUSC	PLN
<i>San José</i>	48.4	48.2	Atenas	53.5	43.8
Central	50.0	46.8	Naranjo	49.5	47.5
Escazú	46.6	50.0	Palmares	50.5	46.3
Desamparados	47.9	48.9	Poás	47.7	49.3
Puriscal	44.8	52.1	Orotina	52.3	44.5
Tarrazú	48.0	49.3	San Carlos	49.2	47.7
Aserrí	45.5	51.3	Alfaro Ruiz	40.3	58.0
Mora	50.2	46.0	Valverde Vega	53.5	43.9
Goicoechea	49.4	47.1	Upala	53.1	41.8
Santa Ana	49.9	46.9	Los Chiles	51.8	43.0
Alajuelita	53.6	42.1	Guatuso	51.0	45.8
Coronado	47.6	49.3			
Acosta	49.3	46.2	<i>Cartago</i>	49.0	47.3
Tibás	50.7	46.1	Central	47.9	49.3
Moravia	48.7	48.3	Paraíso	51.1	44.4
Montes de Oca	46.1	50.7	La Unión	50.6	45.2
Turrubares	51.0	45.3	Jiménez	41.4	53.6
Dota	43.8	53.6	Turrialba	50.6	44.7
Curridabat	48.2	48.4	Alvarado	48.6	48.2
Pérez Zeledón	43.2	53.2	Oreamuno	50.7	46.1
León Cortés	35.9	60.6	El Guarco	46.9	50.3
<i>Alajuela</i>	50.1	46.5	<i>Heredia</i>	49.7	46.8
Central	51.4	45.2	Central	48.1	48.8
San Ramón	46.8	49.1	Barva	50.4	46.1
Grecia	49.8	47.0	Sto. Domingo	49.7	44.8
San Mateo	52.5	44.6	Sta. Bárbara	48.5	47.7

CUADRO 3 (Continuación)

RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Y PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL POR PROVINCIA Y POR CARTÓN, 1990 (porcentajes del voto total)

<i>Provincia y cantón</i>	PUSC	PLN	<i>Provincia y cantón</i>	PUSC	PLN
San Rafael	52.4	43.7	<i>Puntarenas</i>	53.9	40.8
San Isidro	50.7	45.9	Central	53.8	41.1
Belén	49.3	47.6	Esparza	53.4	42.1
Flores	48.5	48.9	Buenos Aires	48.5	45.5
San Pablo	49.8	46.4	Montes de Oro	50.6	45.7
Sarapiquí	47.8	44.7	Osa	56.2	37.1
			Aguirre	57.6	36.7
<i>Guanacaste</i>	51.2	45.1	Golfito	58.1	34.0
Liberia	51.8	44.8	Coto Brus	47.8	47.5
Nicoya	49.3	47.0	Parrita	57.5	36.8
Sta. Cruz	52.6	43.0	Corredores	57.5	35.1
Bagaces	51.5	43.9	Garabito	56.3	35.2
Carrillo	53.2	43.7			
Cañas	56.1	40.4	<i>Limón</i>	57.8	35.2
Abangares	56.6	40.0	Central	59.0	35.4
Tilarán	50.2	46.8	Pococí	57.3	35.1
Nandayure	42.2	53.4	Siquirres	56.3	36.5
La Cruz	54.2	42.1	Talamanca	56.4	35.6
Hojancha	34.8	62.3	Matina	61.3	31.6
			Guácimo	56.4	36.1

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones.

Lo significativo de esta elección es que el PLN perdiera las provincias con mayor concentración urbana, aunque por márgenes pequeños, y que el grueso de la diferencia en votos se localizara en áreas con problemas económicos y sociales graves. De los 57 888 votos de diferencia entre ambos partidos, el 60.9% son votos de Limón y Puntarenas, provincias donde se han manifestado más claramente los efectos negativos de la crisis de principios de la década y de los cambios en la producción, fundamentalmente en el sector agrícola.

En la Provincia de San José, los sitios con mayor votación favorable al PUSC se localizan en el cinturón suroeste de la capital, donde la población es de ingresos tendencialmente bajos; pero también puede observarse una

votación favorable al PUSC en otras zonas aledañas a la ciudad de San José, donde se concentra población con características socioeconómicas similares. Situaciones parecidas ocurrieron en las otras provincias.

Dados los resultados de las tres últimas elecciones, resulta plausible afirmar que los votos estables del PUSC deben ser aproximadamente unos dos tercios de la votación obtenida, gran parte de ellos herencia del calderonismo de los años cuarenta; sin embargo, en esta ocasión el PUSC parece haber canalizado mayoritariamente el voto de los sectores sociales afectados por el ajuste estructural, ya sea debido al congelamiento salarial (no hay que olvidar que en 1987 y 1988 los salarios reales decrecieron); al abandono Institucional, como puede ser el caso de los habitantes de cantones pobres, sobre todo en Guanacaste, Puntarenas y Limón, y a políticas que han afectado negativamente a los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Después de ocho años de gobiernos liberacionistas, y de promesas incumplidas en cuanto a mejoramiento real de las condiciones de vida, estos sectores optaron por el cambio, impresionados por un mensaje calderonista que estaba diseñado para ganar esos votos; en otras palabras, por lo que despectivamente los dirigentes liberacionistas calificaron como "el populismo de Calderón".

El peor error de la dirigencia liberacionista fue el olvidar que la estabilización de la economía no ha impedido que la pobreza se extendiera en los últimos diez años, sobre todo en ciertas zonas del país. En ese sentido, los resultados de la votación del 4 de febrero expresan una sanción contra el PLN, por haber colocado el énfasis de la acción gubernamental en el ajuste estructural, sin tomar en cuenta sus costos sociales; constituyen también una sanción para el gobierno de Oscar Arias, a pesar de que, según los sondeos de opinión, sigue siendo el político más popular del país.

Estos votos del PUSC son entonces una especie de mezcla de voto centrado en el problema, y voto en contra, a lo que habría que agregar los votos castigo al PLN, por la corrupción de que han sido acusados algunos de sus altos dirigentes. Sin embargo, el problema de la corrupción debe de haber jugado un papel secundario, a juzgar por el elevado porcentaje de votos obtenido por Liberación Nacional.

Como se señaló, los votos de base de Liberación Nacional deben ser alrededor del 40% de la votación total, pues se trata de un partido con una trayectoria muy larga, con bases y dirigencias consolidadas en todas las regiones del país. En algunas de ellas el predominio liberacionista es apabullante, como en el sureste de la provincia de San José: en la llamada zona de los "santos" y en Pérez Zeledón. Por el PLN parecen haber votado, además, todos aquellos que veían en un gobierno calderonista una potencial amenaza para sus intereses económicos, desde asalariados de ingresos medios y altos, hasta gran parte del empresariado. Un examen de la votación en zonas de concentración de votantes de ingresos medios y altos, parece apoyar esta afirmación.

La relación entre condiciones socioeconómicas deprimidas y el voto por el PUSC parece indicar una cierta reagrupación de fuerzas sociales, cuyo futuro desarrollo depende tanto de la acción del nuevo gobierno, como de las variaciones ocurridas en el interior de Liberación Nacional. Si la acción gubernamental no satisface las expectativas despertadas por el PUSC en los sectores sociales populares que apoyaron sus papeletas, dentro de cuatro años estos sectores podrían situarse dentro de las filas de Liberación Nacional; que lo hagan depende también de las posibilidades de este partido de reorganizarse y elaborar una plataforma atractiva para esos sectores.

C. LA DINÁMICA DE LA CAMPAÑA

En la campaña política el conjunto de partidos gastó más de 1 700 millones de colones en cedulación, propaganda y movilización de partidarios.⁵ Por supuesto, más de la mitad de esa suma fue gastada por los dos grandes partidos del país, buena parte de ella en publicidad en periódicos, radio y televisión, para impactar a un electorado potencial que, si nos atenemos a las encuestas de opinión, mayoritariamente había decidido su voto muchos meses antes de las elecciones.⁶ Es conveniente destacar que para estas elecciones entraron en vigencia algunas reformas al Código Electoral, que redujeron el período de campaña sustancialmente, y limitaron el espacio de la propaganda en los medios de comunicación.⁷

La campaña en los medios fue superficial; la discusión acerca de los grandes problemas nacionales fue evadida y solamente se realizó un debate directo entre los candidatos de los dos grandes partidos en la televisión. Menudearon las acusaciones y contraacusaciones sobre corrupción y el narcotráfico y, en general, en el estilo de campaña se notó la influencia de los asesores estadounidenses en los comandos de ambos partidos (J. Macleary asesoró al candidato de Liberación Nacional y Roger Ailes a Calderón Fournier): bellas y coloridas imágenes, música agradable y pegajosa, pero poca sustancia; todo ello adobado con algunas truculentas historias acerca de los nexos personales no muy recomendables de candidatos y otros dirigentes de ambos partidos.

⁵ Casi veinte millones de dólares.

⁶ La encuesta realizada a principios de septiembre de 1989 por la firma M. Breedy y Asociados, indica que el porcentaje de indecisos era muy bajo en ese momento: aproximadamente el 20%; la encuesta realizada por la firma Investigaciones Psicosociales en la última semana del mismo mes y la primera de octubre, señala un porcentaje similar de indecisos: 24.7%.

⁷ El período para manifestaciones públicas se redujo a dos meses; la propaganda en los diarios se redujo a una página o el equivalente en centímetros cuadrados por partido; en la televisión los espacios se redujeron a diez minutos diarios por partido en cada una de las estaciones; en la radio el espacio diario señalado fue similar, más treinta minutos semanales para exposiciones de candidatos.

En ese contexto, el Partido Unidad Social Cristiana mostró a lo largo de toda la campaña electoral superioridad frente a su adversario. Se mantuvo siempre a la ofensiva, obligando al PLN, casi sin excepciones, a jugar su propio juego. Mediante la propaganda se logró proyectar una imagen positiva del candidato, presentándolo como un hombre moderado y hogareño, pero a la vez dinámico, capaz de escuchar y de manejar adecuadamente los asuntos del Estado; y lo más importante, como un candidato comprometido con los sectores que no sólo no han recibido ningún beneficio del ajuste estructural, sino que han visto postergadas a lo largo de ocho años sus aspiraciones de mayor bienestar social. De esta manera se logró contrarrestar la propaganda liberacionista, concentrada casi exclusivamente en las "incapacidades" de Calderón como hombre de Estado y en las "virtudes" de Castillo en el mismo plano.

Esta presentación estuvo acompañada de una maquinaria de partido que funcionó eficientemente a lo largo de toda la campaña electoral, hasta el último minuto del día de las elecciones. El PUSC logró combinar con bastante éxito las técnicas modernas de propaganda electoral, basadas en el uso extendido de los medios electrónicos, con los métodos tradicionales de hacer política, que exigen una relación más o menos estrecha con la base partidaria.

Los problemas internos originados en una lucha de tendencias, que puso en peligro la institucionalidad del partido a fines de 1988 y principios de 1989, fueron colocados en segundo lugar, ante la urgencia de evitar una nueva derrota frente a Liberación Nacional; esto quiere decir que el PUSC logró alcanzar el punto de cohesión interna adecuado que debe tener un partido para alcanzar una victoria electoral, lo que no significa, por supuesto, la superación real de rivalidades y resentimientos.

En contraste con el PUSC, Liberación Nacional cometió una cadena de errores a lo largo de la campaña electoral, cuyos resultados fueron una organización ineficiente, una propaganda desabrida y la movilización tardía de la masa liberacionista. A eso habría que agregar las dificultades para cohesionar el partido alrededor del candidato (la lucha de tendencias dejó demasiadas heridas); el pésimo manejo de todo lo relativo a las acusaciones abiertas y veladas de corrupción y los nexos con el narcotráfico de importantes dirigentes liberacionistas, y la marginación que sufrieron algunos dirigentes experimentados.

El comando liberacionista de campaña puso, además, demasiado énfasis en el uso de los medios electrónicos, colocando en segundo plano el contacto personal con la base del partido, con el agravante de que el discurso del candidato, por su forma y por su contenido, no resultaba fácilmente comprensible para las grandes masas de votantes. No fue sino hasta el final que el discurso abstracto se tradujo en ofrecimientos concretos, pero para entonces el mensaje directo de Calderón había calado en los sectores pobres de la población.

Dos victorias consecutivas y una gestión administrativa aparentemente exitosa, habían generado en la dirigencia liberacionista una confianza que rayaba en la prepotencia. Ciertamente, la afirmación de que sólo Liberación Nacional es capaz de administrar adecuadamente a las instituciones del Estado, caló en sectores no liberacionistas, sobre todo de clase media, que temían que un gobierno socialcristiano repitiera la historia de 1978-1982;⁸ pero también operó como una barrera que impedía captar adecuadamente los mensajes que, provenientes de abajo, demandaban una preocupación mayor por las consecuencias negativas del ajuste estructural, y una acción terminante en el espinoso asunto de la corrupción.

Las elecciones del 4 de febrero sacaron nuevamente a flote la profunda crisis moral, ideológica y organizativa que vive el Partido Liberación Nacional desde hace años. Se trata de una agrupación profundamente dividida por intereses y grupos diversos, que se ha mantenido unida gracias a la expectativa de continuación del ejercicio del poder dentro de las instituciones del Estado costarricense; pero los conflictos internos afloraron de nuevo y es de esperar un largo período de pugnas y reacomodos.

D. LAS PERSPECTIVAS DEL NUEVO GOBIERNO

Pasadas las elecciones, el discurso del presidente electo comenzó a cambiar; el énfasis en lo social sostenido en los últimos meses de campaña, fue sustituido por el énfasis en lo económico, con el argumento de que la situación del país no era tan buena como la presentaba el gobierno saliente, y que había problemas que solucionar urgentemente, para evitar que la crisis económica aflorara nuevamente. Un pesado paquete de elevación de tarifas de servicios públicos, de precios de combustibles y de algunos impuestos, fue anunciado unas semanas después de la toma de posición del 8 de mayo; paquete destinado a aliviar el elevado déficit fiscal, que de acuerdo con los jefes del nuevo gobierno, podría llegar hasta los 38 mil millones de colones en 1990 (aproximadamente el 7% del PIB). Paralelamente se anunció un paquete de ayuda, en alimentos y otros insumos, destinado a un grupo de familias en situación de pobreza crítica; pero el presidente Calderón claramente indicó que la aplicación del programa de gobierno hecho público durante la campaña, tendría que posponerse dos años, hasta que la difícil situación del país cambiara.

El gabinete presidencial que comprende ministros y otros funcionarios de categoría equivalente, está integrado por empresarios y hombres de negocios de pensamiento conservador, algunos connotados economistas neoliberales, y unos pocos profesionales de tendencias neorreformistas. La presidencia del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, puestos claves den-

⁸ Se trata del gobierno encabezado por Rodrigo Carazo, en cuyo período se desató la crisis económica.

tro del gabinete, fueron ocupados por hombres provenientes de la ortodoxia neoliberal, conocidos por sus críticas a la forma en que manejaron el ajuste estructural los dos gobiernos del PLN en los años ochenta.

Aunque en términos generales se puede afirmar que el rumbo de los cambios estructurales en el sector productivo y en el aparato estatal seguirá siendo el mismo, de mantenerse la actual correlación de fuerzas dentro del gabinete es de esperar un aceleramiento del programa de ajuste estructural, aunque en condiciones muy diferentes a las de los años ochenta. En efecto, la ayuda económica de Estados Unidos, que fue clave en la estabilización del país a principios de la década, ha disminuido notablemente, y después de la recompra de un importante monto de la deuda externa, el país debe destinar una cantidad considerablemente mayor de sus recursos que en los últimos cuatro años, al pago del resto de la deuda.⁹

Por otra parte, algunos economistas insisten en que las medidas anunciadas o puestas en ejecución, son altamente recesivas y que en el corto plazo se podrán ver los efectos negativos en la situación económica del país. Se ha acusado también al gobierno de incongruencia en las medidas tomadas los primeros tres meses de su gestión, pues mientras por un lado se insiste en la necesidad del paquete tributario para controlar el déficit fiscal, por otro se decreta un aumento de salarios para los empleados del sector público por encima, aparentemente, de las posibilidades del fisco. Por lo pronto la inflación en el primer semestre de 1990 fue de alrededor del 15%, y una tensa intranquilidad priva en el ambiente nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Castillo, Carlos M., *Construyamos el futuro: ideario de mi gobierno*, San José, s.e., 1989.
- CEPAS, *Costa Rica: balance de la situación*, núm. 33 (octubre-diciembre, 1989), y núm. 34 (enero-marzo, 1990).
- Partido Unidad Social Cristiana, *¡El futuro es de todos! Programa de Gobierno 1990-1994*, San José, s.e., 1989.
- Sartori, Giovanni, *Teoría de la democracia*, México, Alianza Editorial Mexicana, t. 1, 1989.
- Rojas-Bolaños, Manuel, "Costa Rica: elecciones, acusaciones, opciones", *Nueva Sociedad*, núm. 104 (noviembre-diciembre, 1989), pp. 19-23.

⁹ En los últimos cuatro años el gobierno pagó una suma menor al 10% del valor de las exportaciones, lo que le permitió disponer de mayores recursos para la inversión interna.